



684

683



"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción."

En este momento, en de suma utilidad e importancia hacer referencia al Incidente en Revisión 313/2011, el cual fue ofrecido como prueba en el informe justificado rendido en este juicio de garantías, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, relativo al juicio de amparo indirecto 865/2010-II y su acumulado 892/2010-II, dada la íntima relación que guarda con el presente asunto (lo cual es un hecho público y notorio), toda vez que en el CONSIDERANDO DÉCIMO del mismo, se resolvió, respecto una situación análoga, lo siguiente:

Páginas 72 a 75:

"...

Por lo que hace a los expedientes administrativos 26SO2010HD038 Y 26SO2010HD067 relativos a la realización de estudios en cuanto al impacto ambiental de las obras (fojas 375 543), independientemente se cumplieron o no los requisitos en esa materia, por su propia naturaleza tampoco pueden demostrar una reducción en los volúmenes de agua a favor de ser importante la quejosa, por los daños y perjuicios de difícil reparación que pudieran causar a la impetrante no guardan relación alguna con el

UNIVERSITY OF TEXAS





000

69



cumplimiento o no de los trámites en materia ambiental de la obra que se contraen dichos expedientes.

El contrato de obra mixta FOOSI-NC-CT-AP-10-001 y el convenio de reconocimiento, aceptación y liberación de responsabilidades celebrado entre la responsable y adjudicataria (fojas 1668 a 1704), demuestra que se realizó la adjudicación de la licitación, pero no permite establecer que el proceso de licitación y construcción de la obra proyectada afectará algún derecho a la impetrante, y menos aún los daños fueron de difícil reparación, máxime cuando ésta reconoció que no pretendía participar en dicha licitación.

Finalmente, con las inspecciones judiciales de siete y diecinueve de julio, y tres de agosto de dos mil once (fojas 1856 a 1859, 1922 a 1900 y 2088 a 2089), se ocredita que en efecto las aguas de la presa La Angostura, por efecto de la gravedad descienden y circulan por el Río Yaqui, hasta la presa Plutarco Elías Calles, luego está la presa Álvaro Obregón, donde se distribuyen para el aprovechamiento de los suelos agrícolas, entre ellos la persona moral quejosa; mientras que con la practicada de quince de julio de dos mil once, se acreditó que se han realizado obras de preparación para la construcción del acueducto (foja 2144), no obstante ninguna tuvo por objeto no demuestra que la construcción de la obra afecte a la esfera de derechos tutelado de la quejosa, ni que la supuesta afectación sea de difícil reparación.

Por ello, se concluye que en el cuaderno incidental no se acreditó que la existencia del proceso de licitación del acueducto y su posterior construcción, afectan a la quejosa, ni mucho menos que existan daños de difícil reparación, pues se insiste que para que pudiera analizarse un eventual perjuicio en su esfera de derechos sería necesario que la toma de agua fuera efectivamente utilizada, y sobre todo que por dicha utilización se redujeran los volúmenes de agua a los que tiene derecho la quejosa o bien, que las autoridades encargadas del agua emitieran una determinación en virtud del cual se dejara sin efectos o limitará la concesión al aprovechamiento del agua su favor.

Consecuentemente, al no surtirse los extremos previstos en las fracciones I y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, lo conducente es negar la

SECRET

DE
 US
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1



886

655



suspensión definitiva solicitada por la quejosa asociación de usuarios productores agrícolas de la sección de riego 4-P-4 del canal principal alto del distrito de riego número 041, Río Yaqui, asociación civil, en cuanto a la suspensión del procedimiento de licitación pública 55,201,001 -001 -10, relativo al proyecto integral para el diseño y construcción del "Acueducto Independencia", que incluye obra y acueducto de la presa "Plutarco Elías Calles", con el objeto de trasladar agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, una vez llegado a la etapa de adjudicación de la obra y no se emita el fallo que se refiere la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas para el estado de Sonora y sus consecuencias.

Una vez que esa ponencia realice el análisis de lo anteriormente expuesto, podrá comprobar la analogía y relación que ello tiene en el presente asunto, tomando en consideración, adicionalmente, que el Municipio de Ignacio Río Muerto, como su entonces Síndico lo reconocen en su escrito de demanda, pertenece y es uno de los asociados del Distrito de Riego 041, Río Yaqui, así como la persona moral que promovió el juicio de amparo número 889/2010, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, mismo que se encuentra concluido por desistimiento de dicha asociación.

Por lo que por mayoría de razón, si no se comprobó en aquellos juicios la afectación o provocación de daños de imposible o difícil reparación, evidentemente en el presente caso, ocurre la misma situación, pues hay que recordar que el Municipio actor, es sólo uno de los usuarios del Distrito de Riego 041, Río Yaqui.

Por otra parte, es un hecho notorio en virtud de los actos reclamados a mi representado, que éstos, por sus características, son de interés social, pues tienen como finalidad el proporcionar agua a la población de la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que otorgar la suspensión solicitada, sí pudiera causarse un perjuicio al interés social dado que contravienen disposiciones de orden público al afectar un derecho constitucional consistente a la garantía de todo mexicano al acceso a las aguas para consumo humano.

Lo anterior, hace inoperantes los conceptos de invalidez de la demanda, en virtud de que se demuestra que los actos reclamados se encuentran apegados a la legalidad y principios constitucionales involucrados en el tema.

SIN TEXTO



REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURIDAD
INTERIOR



657

658



A continuación, se citan ciertos criterios emitidos por nuestro más alto tribunal, al cual honrosamente Usted pertenece, y que se solicita, de la manera más atenta, sean considerados en virtud de la relación y/o identidad que guardan respecto del presente asunto:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis número P./J. 71/2000, visible en la página novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.", que en la promoción de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un interés legítimo para acudir a esta vía el cual, a su vez, se traduce en una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. La jurisprudencia número P./J. 92/99 del Tribunal Pleno, cuyo título es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.", no es de aplicación irrestricta sino limitada a aquellos supuestos en que no sea posible disociar con toda claridad la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, circunstancia que no acontece cuando la inviabilidad de la acción resulta evidente, porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la vía, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto; en esta hipótesis, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo sino sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo privilegiarse en tal supuesto la aplicación de las jurisprudencias números P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001 de rubros:

EX-10

PODER JUDICIAL
SUPLENTE DE
SECRETARÍA DE
JUSTICIA
INCONSTITUC



"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE", de las que se infiere que para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que por lo menos exista un principio de agravio, que se traduce en el interés legítimo de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, para demandar la invalidez de la disposición general o acto de la autoridad demandada que vulnere su esfera de atribuciones.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS DE MORELOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. El interés de los Municipios de Morelos en que se garantice la autonomía de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, al ser éste el órgano encargado directamente de revisar y fiscalizar su cuenta pública, no constituye en sí mismo un interés legítimo, entendido como la afectación al ámbito de atribuciones de la entidad, poder u órgano demandante o, en su defecto, un principio de agravio o afectación, sino que se traduce en un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. En este sentido, aun cuando los Municipios traten de evidenciar una posible afectación a su esfera de atribuciones, es decir, pretendan evitar una futura actuación parcial o dependiente por parte del órgano de fiscalización, es la afectación actual al ámbito de competencia la que otorga el interés legítimo y no la posibilidad de que ocurra, sostener lo contrario sería tanto como extender extraordinariamente la condición de afectación no al presente, sino a una situación potencial, además de que sentaría el erróneo criterio de que existe interés legítimo cada vez que un órgano o poder se sienta afectado por la actuación de otro. Consecuentemente, los Municipios no gozan del interés que se requiere para la procedencia de la controversia constitucional, al no incidir el Reglamento Interior de la Auditoría, en modo alguno, sobre los derechos, facultades, funciones y servicios de que son titulares, ni ser susceptible de causarles una afectación o privarlos de algún beneficio al que tuvieran derecho.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO. NO LO TIENEN LOS MUNICIPIOS PARA IMPUGNAR LAS CONVOCATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS EMITIDAS POR PETRÓLEOS MEXICANOS. Si bien es cierto que los municipios son órganos legitimados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para promover controversias constitucionales, también lo

100-443886-100



MINISTERIO NACIONAL DE L
JUSTICIA, CON FORTALECIMIENTO
DE LA DEFENSA GENERAL
DE LA LEY Y DEL ORDEN
PÚBLICO



688
689



es que no pueden impugnar a través de esta vía una convocatoria emitida por Pemex Exploración y Producción para una licitación pública internacional para la adjudicación de contratos de servicios para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos, el procedimiento relacionado con las bases de licitación, y su respectivo modelo de contrato, ya que éstos son actos ajenos a la esfera de competencias y atribuciones que constitucional y legalmente les corresponden. En efecto, conforme a los artículos 2o., 3o. y 55, fracciones I y II, inciso a), de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica por conducto de Petróleos Mexicanos, el cual es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, explotación y las demás actividades relacionadas con la materia, así como ejercer la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera y, dentro de sus funciones, se encuentra la de emitir las convocatorias para los procedimientos de licitaciones públicas. En ese sentido, las determinaciones de dicho organismo descentralizado en el área estratégica del petróleo no son susceptibles de afectar la esfera de competencias y atribuciones que la Ley Suprema otorga a los municipios, en virtud de referirse a una facultad exclusiva de la Federación que lleva a cabo por conducto del indicado organismo; por ende, jurídicamente es inadmisibles que los municipios puedan resentir alguna afectación o agravio en su esfera competencial por la emisión de las convocatorias para las licitaciones públicas en dicha materia. Esto es así, máxime que de dichas convocatorias tampoco se advierte una posible afectación al derecho que tienen los Municipios a participar de la recaudación Federal, en tanto que no se están modificando las condiciones para la entrega de participaciones, ni se alega que éstas se estén cubriendo incorrectamente.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DARSE OPORTUNIDAD AL ACTOR DE DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGÍTIMO QUE LE ASISTE PARA ACUDIR A ESTA VÍA Y SÓLO DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO ANTE SU FALTA, CUANDO LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN RESULTE TAN EVIDENTE QUE SEA INNECESARIO RELACIONARLA CON EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Aunque, en principio, no pueda vislumbrarse, con toda claridad, si el acto impugnado en vía de controversia constitucional es susceptible de causar afectación al interés legítimo del actor, posteriormente ello puede advertirse, al darle oportunidad de presentar los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de su acción. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XLIV/2002, fijó criterio en el sentido de que, al constituir la falta de afectación al interés legítimo del actor una cuestión de fondo, ésta no puede dar lugar al desechamiento de plano de la demanda, como motivo manifiesto e indudable de

SIN TEXTO



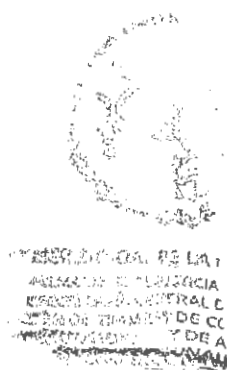
CONSEJO DE LA MANERA
DE LA MANERA DE LA MANERA
DE LA MANERA DE LA MANERA
DE LA MANERA DE LA MANERA
DE LA MANERA DE LA MANERA



improcedencia. En este orden de ideas, debe concluirse que, únicamente habiendo dado oportunidad al accionante de demostrar que el acto impugnado le genera lesión y no habiéndose desvirtuado la presunción de falta de afectación a su interés legítimo, entonces, conforme al criterio sustentado por el Tribunal Pleno, contenido en la tesis P./J. 50/2004, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN.", habría lugar al sobreseimiento en el juicio, lo cual presupone que la demanda fue admitida, con objeto de no dejar en estado de indefensión al demandante, pero que, al no haberse acreditado el interés que le asiste para acudir a la presente vía, ello ha derivado en la inviabilidad de la acción intentada, por ser éste requisito indispensable para estudiar el fondo del asunto.

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promavente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanta que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por la que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia

SIN TEXTO





691 692



constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.

COMPETENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES. SU EJERCICIO SIMULTÁNEO NO ANULA LA TITULARIDAD CORRESPONDIENTE. El ejercicio simultáneo de las competencias estatales en materia de transporte y alguna de las municipales previstas en los incisos a), d), f) o h) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no implica la anulación de unas u otras, pues las competencias constitucionales de los distintos poderes públicos están destinadas a ejercerse en muchas ocasiones simultáneamente respecto de tipos de acciones, sectores de la realidad y espacios geográficos comunes. Esto es, la circunstancia de que se presente esta superposición de ejercicio, sea total o parcial, no anula o daña la respectiva titularidad de competencia constitucional. Por tanto, el hecho de que una determinada ley estatal identifique a ciertas autoridades como facultadas para tomar determinadas decisiones o desarrollar algunas actividades en materia de transporte en el ámbito territorial municipal, no elimina la necesidad de obtener el consentimiento del Municipio competente para emitir autorizaciones que convergen en el mismo espacio físico, como las licencias de uso del suelo en su territorio o el otorgamiento de permisos de construcción.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE LA PROMOVIDA CONTRA EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 10 DE ENERO DE 2003, CUANDO SÓLO SE DEMOSTRÓ EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, PERO NO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE SUS INTEGRANTES. La norma legal citada establece que la Legislatura del Estado de Oaxaca, desde el momento en que dé inicio al procedimiento de desaparición de un Ayuntamiento y hasta en tanto no se emita la resolución correspondiente, podrá decretar, por acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes, ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o un estado de ingobernabilidad, la suspensión provisional del Ayuntamiento. Ahora bien, si dicha norma se impugna en controversia constitucional con motivo del inicio del procedimiento de desaparición de un Ayuntamiento, señalándose como acto controvertido de carácter inminente, la declaración de suspensión

SMILEAD





691
692



provisional del Ayuntamiento, sin que durante su tramitación se haya probado la existencia de dicha determinación, procede sobreseer en la controversia por inexistencia de los actos demandados, en virtud de que el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento no supone necesariamente la emisión de esa medida cautelar, por lo que mientras no se dicte debe estimarse que se trata solamente de la impugnación de un emplazamiento a un procedimiento carente de definitividad, cuya resolución final podrá impugnarla el Ayuntamiento cuando sea desfavorable a sus intereses.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EMITIDA POR UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL EN LA QUE ASIGNA NOTARÍAS Y ORDENA AL EJECUTIVO ESTATAL EXPEDIR LOS FÍATS RESPECTIVOS, AUN CUANDO SE ALEGUE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES. Si se atiende a que el objeto de la controversia constitucional es salvaguardar la esfera competencial constitucionalmente reservada a cada uno de los poderes gubernamentales, se deduce que la resolución por la cual un Tribunal de lo Contencioso Administrativo local asigna notarías y ordena al Ejecutivo estatal expedir los fíats de notario respectivos no es susceptible de analizarse en controversia constitucional, pues implicaría convertir a dicho medio de control constitucional en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural, lo que se contrapone con el objeto de tutela de la controversia constitucional. Por tal razón, aun cuando el actor pretenda sostener la procedencia de la controversia constitucional en el hecho de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al emitir el fallo reclamado, se excedió en sus efectos, arrogándose facultades exclusivas del Ejecutivo estatal y que por esta razón se invade su esfera competencial, el trasfondo de la alegación es la inconformidad con los efectos dados a dicha resolución y que son los que concretamente el actor considera invaden su competencia, máxime si no se inconformó o realizó manifestación alguna tendente a evidenciar la incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para decidir sobre la validez o nulidad del acto administrativo impugnado ante él.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE. La tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección a las atribuciones que la Constitución General de la República prevé para las entidades, poderes u órganos que señala su artículo 105,

SUMTEXIO



1. **PROCESO DE LA FE**
 2. **PROCESO DE LA FE**
 3. **PROCESO DE LA FE**
 4. **PROCESO DE LA FE**
 5. **PROCESO DE LA FE**
 6. **PROCESO DE LA FE**
 7. **PROCESO DE LA FE**
 8. **PROCESO DE LA FE**
 9. **PROCESO DE LA FE**
 10. **PROCESO DE LA FE**
 11. **PROCESO DE LA FE**
 12. **PROCESO DE LA FE**
 13. **PROCESO DE LA FE**
 14. **PROCESO DE LA FE**
 15. **PROCESO DE LA FE**
 16. **PROCESO DE LA FE**
 17. **PROCESO DE LA FE**
 18. **PROCESO DE LA FE**
 19. **PROCESO DE LA FE**
 20. **PROCESO DE LA FE**
 21. **PROCESO DE LA FE**
 22. **PROCESO DE LA FE**
 23. **PROCESO DE LA FE**
 24. **PROCESO DE LA FE**
 25. **PROCESO DE LA FE**
 26. **PROCESO DE LA FE**
 27. **PROCESO DE LA FE**
 28. **PROCESO DE LA FE**
 29. **PROCESO DE LA FE**
 30. **PROCESO DE LA FE**
 31. **PROCESO DE LA FE**
 32. **PROCESO DE LA FE**
 33. **PROCESO DE LA FE**
 34. **PROCESO DE LA FE**
 35. **PROCESO DE LA FE**
 36. **PROCESO DE LA FE**
 37. **PROCESO DE LA FE**
 38. **PROCESO DE LA FE**
 39. **PROCESO DE LA FE**
 40. **PROCESO DE LA FE**
 41. **PROCESO DE LA FE**
 42. **PROCESO DE LA FE**
 43. **PROCESO DE LA FE**
 44. **PROCESO DE LA FE**
 45. **PROCESO DE LA FE**
 46. **PROCESO DE LA FE**
 47. **PROCESO DE LA FE**
 48. **PROCESO DE LA FE**
 49. **PROCESO DE LA FE**
 50. **PROCESO DE LA FE**
 51. **PROCESO DE LA FE**
 52. **PROCESO DE LA FE**
 53. **PROCESO DE LA FE**
 54. **PROCESO DE LA FE**
 55. **PROCESO DE LA FE**
 56. **PROCESO DE LA FE**
 57. **PROCESO DE LA FE**
 58. **PROCESO DE LA FE**
 59. **PROCESO DE LA FE**
 60. **PROCESO DE LA FE**
 61. **PROCESO DE LA FE**
 62. **PROCESO DE LA FE**
 63. **PROCESO DE LA FE**
 64. **PROCESO DE LA FE**
 65. **PROCESO DE LA FE**
 66. **PROCESO DE LA FE**
 67. **PROCESO DE LA FE**
 68. **PROCESO DE LA FE**
 69. **PROCESO DE LA FE**
 70. **PROCESO DE LA FE**
 71. **PROCESO DE LA FE**
 72. **PROCESO DE LA FE**
 73. **PROCESO DE LA FE**
 74. **PROCESO DE LA FE**
 75. **PROCESO DE LA FE**
 76. **PROCESO DE LA FE**
 77. **PROCESO DE LA FE**
 78. **PROCESO DE LA FE**
 79. **PROCESO DE LA FE**
 80. **PROCESO DE LA FE**
 81. **PROCESO DE LA FE**
 82. **PROCESO DE LA FE**
 83. **PROCESO DE LA FE**
 84. **PROCESO DE LA FE**
 85. **PROCESO DE LA FE**
 86. **PROCESO DE LA FE**
 87. **PROCESO DE LA FE**
 88. **PROCESO DE LA FE**
 89. **PROCESO DE LA FE**
 90. **PROCESO DE LA FE**
 91. **PROCESO DE LA FE**
 92. **PROCESO DE LA FE**
 93. **PROCESO DE LA FE**
 94. **PROCESO DE LA FE**
 95. **PROCESO DE LA FE**
 96. **PROCESO DE LA FE**
 97. **PROCESO DE LA FE**
 98. **PROCESO DE LA FE**
 99. **PROCESO DE LA FE**
 100. **PROCESO DE LA FE**



692
693



fracción I, para resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio de esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos, por lo que para que esa vía constitucional proceda, la norma o acto impugnado debe ser susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio al promovente en razón de la situación de hecho en la que se encuentre, la cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y, consecuentemente, los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad, poder u órgano, mas no la afectación a cierta clase de gobernados. Por otra parte, del cúmulo de atribuciones que el artículo 115 constitucional confiere a los Municipios no se advierte la de defender los derechos de los pueblos o comunidades indígenas que se encuentran geográficamente dentro de su circunscripción territorial, en un medio de control constitucional, situación que tampoco se advierte del artículo 2o. de la Ley Suprema, el cual impone una serie de obligaciones a cargo de los diferentes niveles de gobierno en relación con aquéllos; sin embargo, si bien es cierto que las facultades y obligaciones que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios buscan la protección de los pueblos y de las comunidades indígenas, también lo es que se refieren a su propio ámbito competencial, sin llegar al extremo de que, vía controversia constitucional, puedan plantear la defensa de aquéllos. En esas circunstancias, los Municipios carecen de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra disposiciones generales que consideren violatorias de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en su territorio, si no guardan relación con la esfera de atribuciones que constitucionalmente tienen conferidas. Sostener lo contrario desnaturalizaría la esencia misma de la controversia constitucional, pues podría llegarse al extremo de que la legitimación del Municipio para promoverla, le permitiera plantear argumentos tendentes exclusivamente a la defensa de los gobernados que habitan en su territorio, sin importar si afectan o no su esfera competencial, o que, aun sin invadirla, exista un principio de afectación para la situación de hecho que detenten, esto es, como control abstracto, lo cual no es propio de la naturaleza de las controversias constitucionales.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS DE MORELOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. El interés de los Municipios de Morelos en que se garantice la autonomía de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, al ser éste el órgano encargado directamente de revisar y fiscalizar su cuenta pública, no constituye en sí mismo un interés legítimo, entendido como la afectación al ámbito de atribuciones de la entidad, poder u órgano demandante o, en su defecto, un principio de agravio o afectación, sino que se traduce en un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede

SIN TEXTO



MINISTERIO DE JUSTICIA
REPUBLICA DE CUBA
CALLE DE LOS HERMANOS
DE LA ESPERANZA, 10
CUBA



694
843



tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. En este sentido, aun cuando los Municipios traten de evidenciar una posible afectación a su esfera de atribuciones, es decir, pretendan evitar una futura actuación parcial o dependiente por parte del órgano de fiscalización, es la afectación actual al ámbito de competencia la que otorga el interés legítimo y no la posibilidad de que ocurra; **sostener lo contrario sería tanto como extender extraordinariamente la condición de afectación no al presente, sino a una situación potencial, además de que sentaría el erróneo criterio de que existe interés legítimo cada vez que un órgano o poder se sienta afectado por la actuación de otro.** Consecuentemente, los Municipios no gozan del interés que se requiere para la procedencia de la controversia constitucional, al no incidir el Reglamento Interior de la Auditoría, en modo alguno, sobre los derechos, facultades, funciones y servicios de que son titulares, ni ser susceptible de causarles una afectación o privarlos de algún beneficio al que tuvieran derecho.

"REGLAMENTOS MUNICIPALES DE SERVICIOS PÚBLICOS. SU RELACIÓN CON LAS LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y NO POR EL DE JERARQUÍA. El principio que rige las relaciones entre los reglamentos municipales y las leyes en materia municipal, en términos de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de competencia y no el de jerarquía. Ello implica que los reglamentos municipales sobre servicios públicos -al igual que, como se subrayó al resolver la controversia 146/2006, sucede también con los reglamentos sobre organización municipal-, no derivan su validez de las normas estatales (ni de las federales) sino que la validez de ambos tipos de normas procede directa y exclusivamente de la Constitución. Lo anterior implica que los límites de contenido que dichos reglamentos deben respetar son los que provienen de la interpretación de las fracciones II y III del artículo 115 constitucional, cuya extensión, en los casos en que ello resulte litigioso, definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no la voluntad ilimitada o discrecional de las Legislaturas Estatales al emitir las leyes estatales en materia municipal, porque se trata de un esquema en cuyo contexto un nivel de autoridad no tiene facultades mayores o más importantes que el otro, sino que cada uno tiene las atribuciones que le han sido constitucionalmente conferidas. Esto es, la Constitución, en el ámbito referido, atribuye la potestad de emitir la regulación sobre los distintos campos materiales a entes u órganos de gobierno distintos, horizontalmente dispuestos bajo su protección.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO. NO LO TIENEN LOS MUNICIPIOS PARA IMPUGNAR LAS CONVOCATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS EMITIDAS POR PETRÓLEOS MEXICANOS. Si bien es cierto que los municipios son órganos legitimados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados

SECRET

INDEX
 TOP SECRET
 UNCLASSIFIED
 CONFIDENTIAL



694
695



Unidos Mexicanos para promover controversias constitucionales, también lo es que no pueden impugnar a través de esta vía una convocatoria emitida por Pemex Exploración y Producción para una licitación pública internacional para la adjudicación de contratos de servicios para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos, el procedimiento relacionado con las bases de licitación, y su respectivo modelo de contrato, ya que éstos son actos ajenos a la esfera de competencias y atribuciones que constitucional y legalmente les corresponden. En efecto, conforme a los artículos 2o., 3o. y 55, fracciones I y II, inciso a), de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica por conducto de Petróleos Mexicanos, el cual es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, explotación y las demás actividades relacionadas con la materia, así como ejercer la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera y, dentro de sus funciones, se encuentra la de emitir las convocatorias para los procedimientos de licitaciones públicas. En ese sentido, las determinaciones de dicho organismo descentralizado en el área estratégica del petróleo no son susceptibles de afectar la esfera de competencias y atribuciones que la Ley Suprema otorga a los municipios, en virtud de referirse a una facultad exclusiva de la Federación que lleva a cabo por conducto del indicado organismo; por ende, jurídicamente es inadmisibles que los municipios puedan resentir alguna afectación o agravio en su esfera competencial por la emisión de las convocatorias para las licitaciones públicas en dicha materia. Esta es así, máxime que de dichas convocatorias tampoco se advierte una posible afectación al derecho que tienen los Municipios a participar de la recaudación Federal, en tanto que no se están modificando las condiciones para la entrega de participaciones, ni se alega que éstas se estén cubriendo incorrectamente.

Esta cita de criterios, de manera alguna constituye una simple serie de tesis sin razón ni lógica y se ha hecho referencia a las mismas, pues de los razonamientos vertidos en ellas, se pueden detectar los principios rectores que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido para determinar la existencia del interés legítimo, así como los alcances y materia de estudio en las controversias constitucionales.

Al comparar las conclusiones de las citadas tesis con el interés legítimo y los conceptos de invalidez establecidos en la demanda, podrá comprobarse que los mismos son infundados por una parte e inoperantes por otra, lo que tiene como consecuencia que se decrete el sobreseimiento en el presente asunto.

SIN TEXTO



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
BERKELEY
CALIF.



696

645



TERCERO. Inoperancia de los conceptos de invalidez referidos a violación de los decretos de Veda de la Cuenca del Río Yaqui.

El municipio actor, de manera muy importante funda su interés legítimo, en una correlación con la regulación existente respecto de bienes de naturaleza agraria en referidos al Distrito de Riego 041. Se afirma lo anterior, en virtud de la normatividad referida en los conceptos de invalidez que hacen referencia específica a la violación de los decretos de veda, tal y como se puede constatar en la página 50 y subsiguientes del escrito de demanda, sobre todo en la parte específica que cita lo siguiente:

"Que de acuerdo con los estudios hidrológicos hechos sobre el funcionamiento de estas obras, es necesario disponer de todos los escurrimientos del río Yaqui y su cuenca tributaria hasta la presa Álvaro Obregón y evitar que se distraigan en riego de otras tierras fuera del Distrito en perjuicio de éste, al que están destinadas.

SEGUNDO.- Se declara subsistente, por tiempo indefinido, la veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del río Yaqui y de su cuenca tributaria de fecha 27 de julio de 1931, publicada en "Diario Oficial" de la Federación correspondiente al 30 de septiembre del mismo año"

Lo anterior, fue citado por los quejosos, señalándolo como el fundamento total que prohíbe cualquier desvío de las aguas referidas.

Dejando por un lado el tema de que con posterioridad a dicho acuerdo, se han emitido por el Congreso de la Unión, así como por el Ejecutivo Federal, diversa legislación y regulación en materia de aguas nacionales; así como que las condiciones y circunstancias son evidentemente diferentes en la actualidad respecto del momento en que fue emitido dicho acuerdo, basta la simple lectura de las porciones del acuerdo citadas por los quejosos, para evidenciar la ausencia del interés jurídico que reclaman.

Se afirma lo anterior, pues como se ha ventilado ampliamente en el presente juicio, las obras del "Acueducto Independencia", tienen como objetivo satisfacer las necesidades de la población de la ciudad de Hermosillo, Sonora, lo que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, se clasifica como "uso público urbano".

Tomando en cuenta lo anterior, el acuerdo citado por los quejosos, de manera alguna prohíbe que las aguas a que refiere se distraigan fuera del Distrito de Riego, siempre y cuando no sean para el riego de otras tierras fuera del Distrito. Es decir, en el caso puesto a consideración en el

CONFIDENTIAL

[illegible]



presente juicio, no habría impedimento alguno para que incluso las aguas del Distrito de Riego 041, fueran destinadas para satisfacer las necesidades de la población.

Ahora bien, si legalmente se pudiera realizar por parte de la autoridad lo referido anteriormente, con mayoría de razón puede hacerlo cuando no se están desviando las aguas de riego de dicho Distrito.

Lo anterior, es suficiente para demostrar la inoperancia de los argumentos hechos valer por la quejosa, en relación con la dotación de aguas nacionales para ser destinadas fuera de la cuenca del Río Yaqui.

Ahora bien, si fuera el caso de que se estuvieran desviando aguas del Distrito de Riego 041, al cual pertenece el municipio actor, dicha afectación tendría que ser demostrada, cuando menos indiciariamente, lo cual en ningún momento ha ocurrido, máxime cuando la obra en construcción del "Acueducto Independencia" no tiene por objeto retener o impedir el libre flujo de las agua por el río Yaqui, situación que evidencia lo inoperante de los supuestos conceptos de invalidez que se hacen valer al respecto; Se citan a continuación los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación:

RAOUE
A NACIO
CUERD
ION

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.

CUARTO. Inoperancia de los conceptos de invalidez por violación de esferas competenciales referidas a la prestación del servicio de agua potable, en relación con las asignaciones de aguas nacionales otorgadas a la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Sonora.

SECRET

STANDARD FORM NO. 64
GPO: 1964 O - 300-000
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D.C. 20540
1964 O - 300-000



047

098



Para comprobar la inoperancia de los argumentos del actor en relación con este punto, es imprescindible tener en cuenta el alcance y contenido de un derecho fundamental previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, que textualmente dice:

"Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines." (El resaltado es nuestro)

Pues bien, es más que evidente y manifiesta la utilidad pública y el beneficio social que representan los títulos de asignación otorgados por la Comisión Nacional del Agua al Estado de Sonora, pues tienen como objeto abastecer de agua a los habitantes de Hermosillo, Sonora, a fin de satisfacer las necesidades fundamentales del hombre, en estricto apego a lo que hoy establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes transcrito.

Como es de conocimiento, la única fuente de abastecimiento de agua para consumo humano en la Ciudad de Hermosillo lo han sido los mantos acuíferos que se ubican a los alrededores de la mencionada ciudad, los cuales representan grandes abatimientos, dado que la fuente de agua superficial (río sonora) no ha escurrido lo suficiente para poder usar las escasas aguas que conduce, de ahí la necesidad de hacer una obra como lo es el Acueducto Independencia que tiene como objeto conducir aguas de la presa "El Novillo" o Plutarco Elías Calles y con ello garantizar el derecho al acceso, disposición de agua para consumo personal o doméstico, en apego al derecho fundamental consagrado en nuestra máxima norma.

En consecuencia, tenemos que los títulos de asignación de agua emitidos a favor del Gobierno del Estado son de interés público y de bienestar social para los habitantes de Hermosillo, Sonora, dado las extremas condiciones de escasez de agua que existen en esa localidad, lo cual, es un motivo suficiente para sea considerado apegado a derecho los procedimientos y acciones emprendidas por el Ejecutivo Estatal, y por consiguiente, inoperantes los argumentos del municipio actor.

SIN TEXTO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y FISCOS
SERVICIO DE ASESORIA
FISCAL
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
1990



Lo anterior puede comprobarse, tanto del contenido de los títulos de concesión otorgados al Gobierno del Estado de Sonora, de donde se desprende que el único uso autorizado lo es el "Público Urbano" y el artículo 2 fracción XXIV, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, establece el concepto de lo que debe entenderse por ese uso; consistente en lo siguiente:

"ARTICULO 2º.- Para los efectos de este 'Reglamento', se entenderá por:

'XXIV.- Uso público urbano: la utilización de agua nacional para centros de población o asentamientos humanos, a través de la red municipal.

El uso público urbano comprende la utilización de las aguas nacionales para comunidades o asentamientos humanos, teniendo por objeto satisfacer las necesidades más elementales del hombre, como es lo relativo al consumo humano, higiene y salud pública; por lo que no se puede negar que la asignación de volúmenes de aguas nacionales a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora, representa una evidente utilidad pública y beneficio social de la comunidad de Hermosillo, Sonora; por lo que a su Señoría se le solicita de la manera más respetuosa se tome en consideración el beneficio que para la sociedad Hermosillense, representan los títulos de asignación otorgados por la autoridad competente, para atender las demandas de agua de los habitantes de esa localidad:

En este punto es importante destacar lo que dispone el párrafo primero y tercero del Artículo 27 Constitucional, mismos que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada'.

...

'La nación tendrá en todo tiempo el derecho a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de centros de población;...

CLASIFICADO

MINISTERIO DE
DEFENSA
SECRETARÍA DE
DEFENSA
INSTITUTO DE
DEFENSA



699
700



“...”

De lo transcrito, se desprende claramente que la Nación es la propietaria de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, dada la capacidad que nuestra Constitución les reconoce para administrar y custodiar los bienes que le corresponden a la Nación; **que es de interés público regular, en beneficio social, lo concerniente al uso o aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de establecer una distribución equitativa de las riquezas naturales, como las aguas nacionales.**

Pero muy particularmente, el tercer párrafo del precepto constitucional en cuestión, nos señala que es de interés público y beneficio social, **regular, planear y ejecutar las obras públicas para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.**

Ahora bien, los artículos 1 y 2 de la Ley de Aguas Nacionales, establecen lo siguiente:

“ARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable”.

“ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala.”

Por su parte, el artículo 4º de la misma Ley en consulta, señala que:

“ARTÍCULO 4o.- La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de “La Comisión”.

En los artículos 7 fracción I, y 7 Bis fracción V, de la mencionada Ley Hidráulica, disponen lo siguiente:

“ARTÍCULO 7.- Se declara de utilidad pública:’

I.- La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional;’

“...”

“ARTÍCULO 7 Bis.- Se declara de interés público:’

MS
1010



701



“V.- **La atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades, acuíferos, cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas con escasez del recurso;**

“...”

A su vez, en el artículo 9º de la misma Ley de Aguas Nacionales, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 9o.- ‘La Comisión’ tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.”

Por su parte, la Ley de Aguas del Estado de Sonora, congruente con las anteriores disposiciones federales, establece de igual forma, que los actos que reclaman son de interés social y utilidad pública ya que las disposiciones legales que regulan las aguas que se usan o aprovechan en el Estado de Sonora así como la prestación de servicios, así lo disponen.

En ese sentido, el artículo primero y tercero de dicha norma estatal y también obligatoria para mi representada, establece:

“ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regulan la participación de las autoridades estatales y municipales, así como de los sectores privado y social, en la planeación y programación hidráulica y la administración, manejo y conservación del agua, en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como en la realización de los estudios, proyectos y obras relacionadas con los recursos hídricos en el marco del desarrollo sustentable del Estado.”

“ARTÍCULO 3º.- Se declara de utilidad pública, para los efectos de la presente Ley:

I.- La planeación, construcción, ampliación, rehabilitación, conservación, mantenimiento, administración y recuperación de las obras y servicios necesarios para la operación de los sistemas y la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición

SECRET

SECRET
SECRET
SECRET
SECRET
SECRET



702

741



de aguas residuales en los centros de población y asentamientos humanos de los municipios del Estado, así como las relativas a los sistemas de agua para riego, aprovechamiento acuícola, pecuario, turístico, el control de avenidas y la conservación de cuencas;

De la interrelación de los anteriores preceptos legales podemos concluir que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que es interés público la extracción, el uso y el aprovechamiento de las aguas nacionales, que para ello se deberá seguir lo que dispongan las leyes que al efecto expida el Congreso de la Unión, siendo el caso que la Ley reglamentaria de ese artículo, es decir, la Ley de Aguas Nacionales, precisa que es de utilidad e interés público la participación del Estado para mejorar los servicios de agua domésticos y públicos urbanos para atender el bienestar social y salud pública, sobre todo cuando en la región, como lo es la Ciudad de Hermosillo, presenta situaciones de escasez del recurso hídrico.

En armonía con las anteriores disposiciones legales, la Ley Estatal del Agua establece que la misma es de orden público e interés social y declara que es de utilidad pública la planeación y construcción de obras necesarias para la operación de sistemas y la prestación de servicios de agua potable para los centros de población y asentamientos humanos.

En ese sentido, si la obra pública o acueducto que el Gobierno del Estado, pretende operar para abastecer de agua potable a la ciudad de Hermosillo, si el agua será para atender las necesidades básicas de las personas que la habitan, si se construye es porque la cuenca hidrológica (río sonora) donde se encuentra ubicada la capital del Estado, ha presentado una severa y prolongada sequía desde el año 1995, es decir, 17 años prácticamente sin agua en las presas de ese río, si todo lo anterior se hace con el único fin de garantizar el agua a personas para poder atender aspecto tan relevantes e importantes como lo es la salud pública y el bienestar social y si todas las leyes aplicables a la materia lo consideran de utilidad e interés público y además la propia Constitución obliga a las autoridades a garantizar el acceso y disposición de agua para consumo humano o doméstico, como es el caso, lo lógico es que se declaren infundados e inoperantes los conceptos de validez hechos valer por el actor en su demanda.

QUINTO. Aplicación de la Teoría de la ponderación de principios en el presente asunto.

Partiendo de que son inoperantes los argumentos contruidos con afirmaciones sin sustento o que ni indiciariamente permitan comprobar que se afecta la esfera jurídica de los quejosos o que se causa daño de imposible o difícil reparación a sus derechos, tenemos que en el presente caso, los conceptos de violación formulados en la demanda y su ampliación, referidos a la violación de derechos humanos, así como a diversos tratados y acuerdos de carácter internacional firmados por nuestro país, son por las mismas razones, inoperantes también.

3-17-1950
TEXAS



OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF
LANDS
AND NATURAL
RESOURCES
DALLAS, TEXAS



703 702



Lo anterior, en virtud de que para que pudiera darse dicha violación, se requiere necesariamente la afectación de los derechos del quejoso, pues en caso contrario, sería imposible la violación de los derechos que se encuentran sustentados en los instrumentos referidos.

De hecho, para darle la razón a los quejosos, tendría que llegarse al absurdo de considerar que las legislaciones fundamento de los actos administrativos que se reclaman en la ampliación de la demanda, son violatorias de derechos humanos y contrarias a los tratados y acuerdos internacionales firmados por México, lo cual definitivamente resulta inatendible.

Es pertinente resaltar, que de manera alguna se comprueba en la demanda la violación referida, hecho por el cual no se puede ni siquiera argumentar que éstos fueron parte de los motivos por los cuales la responsable otorgó la suspensión de plano.

Además, no hay que perder de vista lo siguiente:

Suponiendo, lo cual en ningún momento se acepta por mi representada, que fueran fundados los argumentos hechos valer por los quejosos, ni aún en ese caso, tendrían la razón, toda vez que estaríamos ante lo que la teoría denomina como "ponderación de principios", y que se da cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, no requiriendo mayor análisis que el derecho humano al consumo de agua para necesidades público urbanas de los habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, es superior frente al uso agrícola o para los humedales que reclama el actor, máxime cuando dicho derecho fue elevado a garantía constitucional.

A continuación se citan una serie de criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, que se consideran aplicables por analogía dada la íntima relación que tienen con los temas a dilucidar en el presente asunto, toda vez que en el mismo se reclaman violaciones a los derechos establecidos por la Constitución en relación con la invasión de esferas competenciales:

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR.

Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad, la cual es la legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por resultar ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el objetivo pretendido; b) necesidad, consistente en que no exista otro medio menos limitativo para satisfacer el fin del interés público y que sacrifique, en menor medida, los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios; o sea, que resulte imprescindible la restricción, porque

TEXTO



SECRETARÍA DE LA
FEDERACIÓN DE
ESTADOS UNIDOS DE AC
CIÓN LIBRE Y CONTI
NUACIÓN DE LA ACCI
ÓN REVOLUCIONARIA



704 743



no exista un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y c) el mandato de proporcionalidad entre medios y fines implica que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favor de dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que el sacrificado. Esto es que no se renuncie o sacrifiquen valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice los intereses en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulte indispensable y que conlleve a un mayor beneficio o cause un menor daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a primar debe ser aquel que cause un menor daño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio."

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS, CUANDO EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, ES PREFERENTE AL DE LA QUEJOSA.

De acuerdo con la teoría de ponderación de principios, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad; b) necesidad; y c) proporcionalidad. Por tanto, cuando verbigracia, el quejoso solicita la suspensión con el propósito de paralizar la continuación de un proyecto deportivo nacional, en tanto se resuelve el juicio en lo principal y se encuentran en conflicto por un lado, el derecho a la educación académica y deportiva de las personas y, por otro, el derecho del solicitante a continuar practicando fútbol americano como actividad deportiva en equipo reducido, los elementos o subprincipios señalados tienen plena aplicación, pues el interés de la sociedad que con la continuación de los actos impugnados se busca tutelar y salvaguardar, derrotan y prevalecen sobre los intereses particulares del quejoso. Por ende, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquel que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Lo anterior se obtiene, en el caso particular, negando la suspensión solicitada al quejoso, a fin de permitir la plena eficacia de las consecuencias del acto reclamado, traducida en la consecución de la obra pública denominada Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, concretamente para que se continúe con la orden de demoler el inmueble defendido por el solicitante, en beneficio del interés social de los dos mil quinientos atletas a quienes se encuentra dirigido, pues con ello se salvaguarda el derecho a la educación

EXFO

10/28/68
 MEMPHIS
 JAMES EARL RAY
 10/28/68
 10/28/68



705



académica y deportiva en una infraestructura pública dirigida a un grupo mayoritario o colectivo, constitucionalmente tutelado, con prioridad a los estrictamente individuales, como es el derecho a practicar fútbol americano en un grupo reducido titularidad del quejoso."

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONFORME A LA TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS, CUANDO EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, ES PREFERENTE AL DE LA QUEJOSA. Conforme a la teoría de los principios, cuando dos derechos fundamentales o principios entran en colisión, los juzgadores deben resolver el problema atendiendo a las características del caso concreto, ponderando cuál de ellos debe prevalecer y tomando en cuenta tres elementos: I) La idoneidad; II) La necesidad; y, III) La proporcionalidad. El primero se refiere a que el principio adoptado como preferente sea el idóneo para resolver la controversia planteada; el segundo consiste en que la limitación de cierto principio sea estrictamente necesaria e indispensable, es decir, no debe existir alternativa que sea menos lesiva; y el tercer elemento se refiere a que debe primar el principio que ocasione un menor daño en proporción al beneficio correlativo que se dé u obtenga para los demás, en otras palabras, cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. Por tanto, cuando, por ejemplo, una empresa farmacéutica solicita la suspensión de la aplicación de una ley en tanto se resuelve el juicio en lo principal y se encuentran en conflicto, por una parte, el derecho a la salud de las personas y, por la otra, el derecho adquirido de la quejosa de mantener indeterminadamente los registros sanitarios de sus medicamentos y equipos médicos, los tres elementos de la ponderación referidos tienen plena aplicación, ya que los intereses de la sociedad que con la aplicación de la ley impugnada se busca tutelar y consolidar, derrotan y prevalecen sobre los particulares del quejoso. Por tanto, el derecho o principio que debe prevalecer es el que cause un menor daño, el que resulte indispensable y deba privilegiarse, es decir, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Todo esto se obtiene, en la especie, negando la suspensión solicitada a fin de permitir la plena eficacia de las consecuencias de la ley reclamada en beneficio de los intereses sociales de los consumidores de los productos médicos, constitucionalmente tutelados, con prioridad a los estrictamente individuales, de contenido patrimonial, como son los de la titularidad de la quejosa.

DERECHOS CONSTITUCIONALES. LA VINCULACIÓN DE SUS LÍMITES EN EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA SECUNDARIA. El grado de incondicionalidad de un derecho constitucional va a depender del interés público y social, cuando estas limitantes se puedan desprender de lo dispuesto en el texto básico, así como de los derechos constitucionales de los demás gobernados que pudieran estar en colisión frontal, en

SIN TEXTO

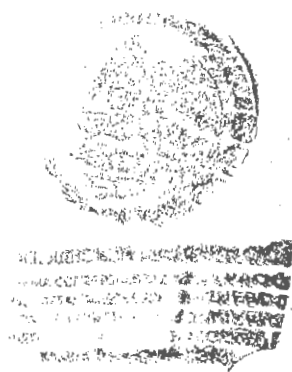




determinado momento, con aquéllos, dado que también vinculan a todo poder público, incluyendo a los tribunales, lo cual produce que la medida y alcance del derecho fundamental específico sea el resultado de su balance con todos esos aspectos, que será reflejo de la cultura e idiosincrasia de la comunidad en el país. Por tanto, si el Constituyente equilibró, en la medida de lo posible, los intereses individuales con el interés público y los derechos de tercero, interrelacionados en la Norma Suprema, es labor del Juez constitucional, en el ejercicio de sus atribuciones de control, realizar una ponderación de los valores que están en juego en cada caso concreto y establecer una relación proporcional entre ellos, con el fin de que tengan eficacia todos, aun cuando alguno deba ceder en cierto grado en función de otro, pues la coexistencia de valores y principios que conforman la Norma Suprema exige que cada uno se asuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos otros que también fueron considerados por el Constituyente, lo cual es conforme con el principio de unidad de nuestro Ordenamiento Supremo y con la base pluralista que lo sustenta.

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS, DEBE NEGARSE CONTRA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, PUES EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD PREVALECE Y ES PREFERENTE AL DERECHO DE LA QUEJOSA A LA CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS. De acuerdo con la teoría de ponderación de principios, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión debe resolverse el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad, b) necesidad y c) proporcionalidad. El primero se traduce en la legitimidad del principio adoptado como preferente, es decir, que sea el adecuado para lograr el fin constitucionalmente válido o pretendido; el segundo consiste en que no exista otro medio menos oneroso para alcanzar el fin deseado o que afecte en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y, el tercero implica equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del bien público, lo que significa que no se sacrifiquen principios o valores constitucionalmente más importantes o de mayor peso al que se desea satisfacer. En ese contexto, cuando en un juicio de amparo se solicita la suspensión contra la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica en cuanto a requerimientos de información y documentación formulados por la Comisión Federal de Competencia en el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas, debe considerarse, por una parte, que de concederse la medida cautelar se afectaría gravemente el interés de la sociedad, pues al permitirse a la quejosa no proporcionar la información y documentación requerida, se paralizaría tal procedimiento -que es de

UNITED STATES





707

708



interés social y orden público- impidiendo que se determinara si se realizan o no esas prácticas, lo que haría nugatoria la facultad de investigación de la mencionada comisión, y además, se dejaría de proteger el proceso competitivo, consecuencia de la libre concurrencia económica, que tiene como resultado menores costos, mayor eficiencia, mejores y nuevos productos y mayores servicios para los usuarios y consumidores, que es una finalidad que se encuentra tutelada como derecho fundamental y garantía en el artículo 28 constitucional; y, por la otra, que al negarse la medida no se afectan los derechos de la quejosa, pues la información y documentación requerida no es imposible de rendir o radicalmente arbitraria por inconducente y tampoco se violan sus derechos sustantivos, protegidos por la Constitución, al no verse afectados irreversible o irremediablemente, de manera que se le pudiesen causar daños de difícil reparación, desproporcionalmente mayores a los que pudiese resentir la sociedad, dado que conforme al artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica, la información y documentación que maneja la referida comisión durante la etapa de investigación es estrictamente confidencial y se puede solicitar, e inclusive exigir, que se trate como tal en las posteriores etapas del procedimiento, de modo que se impida su divulgación a los agentes económicos investigados, a terceros extraños o al público en general, salvaguardándose así su confidencialidad y secrecía. Por consiguiente, es claro que debe negarse la suspensión, puesto que el interés de la sociedad prevalece sobre el interés particular de la quejosa, pues el principio que debe primar es aquel que causa menor daño y, por ende, el que resulta indispensable privilegiar, porque evidentemente conlleva un mayor beneficio."

En virtud de lo expresado hasta este momento y tomando en consideración de manera adminiculada los hechos, argumentos y criterios hechos valer en el presente recurso, queda comprobada la ilegalidad de la resolución recurrida, por lo cual se solicita a su Señoría, que declare infundados y/o inoperantes, según sea el caso, los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda.

PRUEBAS

En este acto y de conformidad con lo dispuesto en el diverso artículo 32 de la ley de la materia, se ofrecen las documentales que a continuación de señalan, incorporándose desde este momento solo las relativas a las señaladas en los incisos f), h) e i), solicitando desde este momento se tengan por presentadas y por lo que se hace a las diversas señaladas en los incisos (a), b), c), d), e), y g), solicito se tengan por anunciadas dado que una vez que recaiga el respectivo acuerdo a la promoción exhibida en el cuaderno incidental formado con motivo de la solicitud de suspensión (que ya fue negada), se exhibirán las restantes en copia certificada.

SIN TEXTO



708


717



- a) **Documental Pública** consistente en un informe de los trabajos de construcción del "Acueducto Independencia".
- b) **Documental Pública** consistente en copia certificada de la documentación que sustenta la legalidad de la autorización del proyecto, ejecución o construcción de la obra y operación del Acueducto Independencia.
- c) **Documental Pública** consistente en copia certificada de la solicitud de manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo de Operación de Obras Sonora SI.
- d) **Documental Pública** consistente en copia certificada de la resolución de manifestación de impacto ambiental de la SEMARNAT, recaída a la anterior.
- e) **Documental Pública** consistente en copia certificada de los títulos de asignación de aprovechamiento de aguas nacionales a favor de la Comisión Estatal de Agua del Estado de Sonora.
- f) **Documental Pública** consistente en copia de la ejecutoria dictada Incidente en Revisión 313/2011.
- g) **Documental Pública** consistente en la relación de los títulos de asignación de aprovechamiento de aguas nacionales a favor del Ayuntamiento de Ignacio Río Muerto, Sonora.
- h) **Documental Pública** consistente en copia del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, que contiene la fracción IV del artículo 9, del Acuerdo que Establece las Atribuciones de las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
- i) **Documental** consistente en minuta de trabajo de fecha 3 de junio de 2010, firmada por el C. ROMAN REYES VALDEZ.

Por lo anteriormente expuesto, **HONORABLE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, MINISTRO INSTRUCTOR DE LA PRESENTE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL**, solicitamos:

SIN
TEXTO



MINISTERIO DE
JUSTICIA
SECRETARIA DE
JUSTICIA
SECRETARIA DE
JUSTICIA



709



Primero. Tener por presentada en tiempo y forma la presente contestación de demanda de controversia constitucional, con las copias de traslado correspondientes.

Segundo. Dictar resolución en la que se declare la legalidad y constitucionalidad de los actos reclamados a mi representado, y que sobresea la demanda.

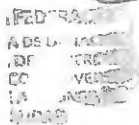
Tercero. Tener como domicilio, y como delegados en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los señalados en el proemio del presente escrito.

LO ANTERIOR SE FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO

Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal
del Gobierno del Estado de Sonora



ERG/OFRM

064532

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2012 NOV 9 PM 3 09

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SECCION DE TRAMITE DE
CONTROVERSIAS CONSY
DE ACCIONES DE INCONS.

2012 NOV 12 AM 8 34

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SUBSALA GRAL. ACCOS.

Recibido de correo, en
original, con:

- Un nombramiento con certificación de Archivo, en 01-faa.
 - Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
 - Minuta de trabajo, en 01-faa.
 - Copia Simple de una resolución, en 54-faa.
- Así como 10 copias del presente
oficio y anexos.

En el sobre que se agrega.

